TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE
CUNDINAMARCA
Sala Civil – Familia

Magistrado Sustanciador:
Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Bogotá, D.C., quince (15) de noviembre de dos mil veintidós (2022).

Ref: 25286-31-03-001-2016-00042-02 (2019-00080-01).

Se decide el recurso de apelación interpuesto por los demandantes contra el auto de 1º junio pasado proferido por el juzgado primero civil del circuito de Facatativá dentro del proceso verbal de Álvaro Hernán Macías Rodríguez y Jorge Eliécer Morales Velasco contra Jesús Andrade Roldán, Carlos Arturo, Jesús Enrique, Ricardo y Jhon Jairo Andrade Camargo, mediante el cual rechazó la reforma de la demanda, teniendo en cuenta los siguientes

I.- Antecedentes

La demanda, que pide declarar resuelto el contrato de promesa de compraventa celebrado entre Jesús Andrade como promitente vendedor y Álvaro Hernán y Jorge Eliécer como promitentes compradores el 23 de julio de 2015, fue presentada el 16 de febrero de 2016 y admitida por auto de 15 de junio posterior, en el que se ordenó la notificación de los demandados.

Decretada la pérdida de competencia por parte del juzgado civil del circuito de La Mesa, ante el cual se presentó la demanda, el 16 de mayo de 2019, el juzgado primero civil del circuito de Facatativá, despacho al que fueron asignadas, avocó conocimiento del trámite y fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia inicial el 18 de noviembre de ese año, data en que, tras ser instalada,

consideró que no era posible evacuar la etapa de conciliación, en la medida en que se estableció el deceso del demandado Jesús Andrade Roldán, por lo que debían convocarse a sus herederos, y porque teniéndose noticia de que el demandado Carlos Arturo Andrade Camargo se encuentra privado de la libertad y no cuenta con apoderado judicial, se configura la causal de interrupción prevista en el artículo 159 del código general del proceso, debiéndose entonces primero notificarlo por aviso a efectos de continuar con el trámite.

En trámite las citaciones, los demandantes procedieron a reformar la demanda, libelo que, previa inadmisión, fue admitido por auto 30 de octubre de 2020; decisión que revocó tras revisarla en reposición, considerando que ya desde el año 2019 se había fijado fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial, la que alcanzó a instalarse, pero fue suspendida debido a las circunstancias que allí se advirtieron, lo que permite colegir que ésta es extemporánea en los términos del artículo 93 del código general del proceso; en todo caso, aunque la juzgadora anterior decretó la interrupción del proceso con el fin de notificar a los herederos del demandado Jesús Andrade Roldán, su deceso, al haber estado actuando por conducto de apoderado, no afecta la actuación, pues se trató apenas de un acto de simple comunicación procesal.

Contra esa determinación, los actores interpusieron recurso de apelación, el que les fue concedido en el efecto devolutivo y, debidamente aparejado, se apresta el Tribunal a desatar.

II.- El recurso de apelación

Alegan que el cambio de titular del juzgado no puede traducirse en el cambio repentino del criterio sobre el que se rige el proceso, de donde debe concluirse que la reforma fue presentada en tiempo, sobre todo porque lo decidido en la audiencia de 18 de noviembre de 2019 entraña una nulidad, la que por fundarse en la falta de notificación de

los herederos determinados e indeterminados, implica que el contradictorio no estaba debidamente integrado y, por ende, que la fijación de la audiencia inicial se retrotrajo, decisión que cobró firmeza sin protesta de las partes, por lo que es imposible desconocerla, ni siquiera bajo la óptica del antiprocesalismo; por lo demás, el juzgado tardó más de un año en resolver el recurso, lo cual impone el decreto de pérdida de competencia en los términos del artículo 121 del código general del proceso y la sentencia C-443 de 2019.

Consideraciones

La cuestión es que la extemporaneidad de la ‘reforma de la demanda’ en que dio el a-quo se impone. Si el legislador permite que el demandante, a través de la reforma de la demanda, corrija o modifique los pilares que trazó desde un inicio al sustentar el derecho sustancial litigado, lo que resulta viable siempre y cuando subsistan los puntos esenciales del litigio y se presente dentro de los términos precisamente señalados por éste, mal podría el Tribunal desentenderse de ese mandato, en contravía del principio de la preclusión que informa los juicios civiles, para dar cabida a la tesis que plantean los recurrentes, la cual, vistas de buen modo las cosas, no resulta cabal (sublíneas intencionales).

Ciertamente, como vino acentuándolo el juzgador a-quo, reza el artículo 93 del estatuto general del proceso que el “*demandante podrá corregir, aclarar o reformar la demanda en cualquier momento, desde su presentación y hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial*”, entendiéndose por reforma la “*alteración de las partes en el proceso, o de las pretensiones o de los hechos en que ellas se fundamenten, o se pidan o alleguen nuevas pruebas*”.

Aquí, los demandantes son conscientes de que cuando pretendieron modificar su libelo incoativo al amparo de esa disposición, el 25 de septiembre de 2020, ya esa oportunidad a que alude el antedicho precepto había fenecido, como que dicho intento lo hicieron mucho tiempo

después de haberse fijado por primera vez dentro del proceso fecha y hora para llevar a cabo la audiencia inicial [16 de mayo de 2019], de donde, sin muchos atisbos, su rechazo era de esperarse, cual dio en comprenderlo el a-quo; tan persuadidos están de ello, que para controvertir esa conclusión ensayan un discurso encaminado a hacer ver que la decisión que se adoptó en la audiencia de 18 de noviembre de ese año, tuvo la virtualidad de retrotraer el proceso, lo que los habilitaba nuevamente a hacer uso de esa prerrogativa.

Las cosas, empero, no son así, empezando porque la ley procesal en materia civil y de familia es clara en señalar que esa oportunidad se extiende únicamente “hasta antes del señalamiento de la audiencia inicial” (subraya la Sala), que no hasta antes de que aquélla pueda realmente evacuarse, pues de haber sido ése el querer del legislador, en otros términos habría quedado redactada la norma, por lo que a ella debe atenderse el juzgador, pues ese cariz de orden público que le es inmanente a las normas procesales, las hace *“de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso, podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley”*, como lo dispone el artículo 6° del código general del proceso, en plena armonía con el precepto 228 de la Carta Política, de donde no puede el juzgador, por más garantista que sea y que pretenda serlo, ampliar a su arbitrio un término que en el margen de su discrecionalidad y libertad de configuración fue establecido por el legislador, pues ese desconocimiento de su fuerza imperativa sí resultaría incompatible con el orden constitucional.

Pero además, porque repasando las determinaciones que se adoptaron en la antecitada audiencia, no se ve que en verdad el juzgado haya declarado una nulidad que implicara retrotraer la actuación a ese estadio procesal previo al señalamiento de la audiencia inicial; nótese, en efecto, cómo habiéndose acreditado el fallecimiento del demandado Jesús Andrade Roldán, el cual acaeció el 11 de diciembre de 2016, dispuso apenas convocar a sus herederos

determinados e indeterminados, algo natural si es que el numeral 1° del artículo 159 del código general del proceso sólo habla de interrupción del proceso por “*muerte, enfermedad grave o privación de la libertad de la parte que no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad litem*” (sublíneas del Tribunal), de suerte que si en el caso de autos ese demandado estaba representado por mandatario, no es posible considerar, con miramientos en este texto legal, que el deceso de aquél apareje la interrupción del proceso y, de ahí, la nulidad en la que enfatiza la apelación, pues se reitera, la antecitada causal sólo se configura ante la “*muerte o enfermedad grave de la parte*”, pero siempre que ésta “*no haya estado actuando por conducto de apoderado judicial, representante o curador ad-litem*”; es por ello que “*cuando desaparece alguno de los intervinientes en el debate sus sucesores pueden participar en él, pero sólo es imprescindible citarlos cuando no existe apoderado debidamente reconocido que haga valer los derechos del difunto, evento en el cual la actuación se paraliza ipso jure*”, cosa que no acontece “*si se da el óbito de un pleiteador que cuenta con apoderado para la litis*”, ya que “*éste puede seguir actuando al tenor del penúltimo inciso del artículo 69 ejusdem, según el cual «[l]a muerte del mandante, o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda», lo que no obsta para que en cualquier momento el poder sea «revocado por los herederos o sucesores», a su criterio*” (Cas. Civ. Sent. de 12 de septiembre de 2014, exp. SC12377-2014 – sublíneas ajenas al texto).

Menos cuando, como lo ha sostenido la doctrina jurisprudencial, en esas condiciones “*no surge un mandato perentorio al juzgador para que provoque su presencia, sino la mera posibilidad de que los continuadores de la personalidad del difunto acudan o no, a su arbitrio, a impulsar el pleito*” (sentencia citada), lo que significa que al disponer la citación de esos herederos el juzgador de turno no estaba verdaderamente intentando integrar debidamente el contradictorio, porque el demandado fallecido ya había

sido notificado y estaba debidamente representado y mucho menos decretando la nulidad de la actuación, sino apenas disponiendo lo pertinente para que operara la figura de la sucesión procesal prevista en el precepto 68 del citado ordenamiento, con arreglo al cual, “[f]allecido un litigante o declarado ausente, el proceso continuará con el cónyuge, el albacea con tenencia de bienes, los herederos o el correspondiente curador”.

Y aun cuando respecto del demandado Carlos Arturo Andrade Camargo sí habló de interrupción por tener noticia de que se encontraba privado de la libertad y no contaba con apoderado judicial, pues el numeral 3° del citado artículo 159 sí establece como tal la “*muerte, enfermedad grave o privación de la libertad del representante o curador ad litem que esté actuando en el proceso y que carezca de apoderado judicial*”, lo cierto es que ninguna causal de ineficacia allí encontró acreditada y tampoco declaró; dispuso apenas notificarle por aviso la existencia del proceso, verificado lo cual continuaría su trámite, mandato que acompasa con lo dispuesto en el precepto 160 del citado ordenamiento, a cuyo tenor se tiene que “[e]l juez, inmediatamente tenga conocimiento del hecho que origina la interrupción, ordenará notificar por aviso al cónyuge o compañero permanente, a los herederos, al albacea con tenencia de bienes, al curador de la herencia yacente o a la parte cuyo apoderado falleció o fue excluido o suspendido del ejercicio de la profesión, privado de la libertad o inhabilitado, según fuere el caso”, previsión que se complementa señalando que “[l]os citados deberán comparecer al proceso dentro de los cinco (5) días siguientes a su notificación. Vencido este término, o antes cuando concurran o designen nuevo apoderado, se reanudará el proceso”.

Lo cual resulta demostrativo de que esa orden no implicó retrotraer la actuación; antes bien, estaba adoptando las medidas necesarias para velar por la supervivencia del proceso, algo en lo que juegan indudablemente los principios que inspiran las nulidades,

entre los que se cuentan en forma prominente el de conservación, según el cual debe prevalecer la subsistencia del acto procesal, en vez de la destrucción, y el de economía, de donde no existen razones que sugieran que la reforma de la demanda se presentó oportunamente, como para que su admisión a trámite estuviera permitida.

Solo resta decir, ya para terminar, que si de acuerdo con el artículo 328 citado, la competencia de la Corporación cuando de la apelación de autos se trata, se restringe únicamente a tramitar y decidir el recurso de alzada, condenar en costas y ordenar copias, es obvio que ningún pronunciamiento cabe hacer relativamente a la pérdida de competencia que vino a solicitarse apenas en la sustentación del recurso de apelación, de suerte que sin más disquisiciones, se confirmará el auto apelado, con la condigna imposición en costas a cargo de la recurrente, según la regla prevista en el numeral 1º del artículo 365 del citado ordenamiento.

III.- Decisión

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cundinamarca, Sala Civil – Familia, confirma el auto impugnado de fecha y procedencia preanotados.

Costas del recurso a cargo de los recurrentes; liquídense por la secretaría del a-quo en el momento procesal oportuno, incluyendo la suma de \$250.000 por concepto de agencias en derecho.

Oportunamente vuelva el proceso al juzgado de origen para lo de su cargo.

Notifíquese y cúmplase,

Germán Octavio Rodríguez Velásquez

Firmado Por:
German Octavio Rodriguez Velasquez
Magistrado Tribunal O Consejo Seccional
Sala 004 Civil Familia
Tribunal Superior De Cundinamarca - Cundinamarca

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c1364e0ab848ce086566deae641728ed88185d4ef85f3f9c23561b34d8a295d8**

Documento generado en 15/11/2022 02:23:27 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:
<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>